

OPONE EXCEPCION.-**SR. JUEZ CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES IIIª NOM.****JUICIO: TELLO ROQUE JOSE AGUSTIN C/ QUIROGA RICARDO HUMBERTO Y OTROS/ COBRO EJECUTIVO.****EXPTE.: 2242/24**

RICARDO HUMBERTO QUIROGA, argentino, mayor de edad, DNI 16.685.972, con domicilio real en calle Mariano Moreno n° 161, 1º piso, Depto G de esta ciudad, S. M. de Tucumán; constituyendo domicilio procesal en casillero digital n° **20267831018**, con el patrocinio letrado del Dr. **LEANDRO G. SAAVEDRA** (Abogado - Mat. Prof. 5870 -LºL Fº365), cel. n° 3815677346, mail lg_saavedra@hotmail.com, por ante V.S. comparece y respetuosamente dice:

I) OPONE EXCEPCION DE INHABILIDAD DE TITULO.-

Que en tiempo y forma, vengo a oponer excepción legal al curso y progreso de esta ejecución iniciada en mi contra, y a solicitar su rechazo con expresa imposición de costas.

Que opongo a esta demanda la excepción de inhabilidad de título, dejando NEGADA la existencia de la deuda que se me reclama. Niego adeudar la suma reclamada de \$923.846, ni suma alguna como se pretende alegar en la demanda y en la forma en que ha sido introducida la pretensión; así como niego adeudar suma alguna en concepto de intereses pretendidos ni punitorios ni compensatorios, ni ninguna otra deuda por acrecida alguna u honorarios que inadmisiblemente se pretenden.

Por lo expresado dejo **expresamente negada la existencia de la deuda ejecutiva que se introduce.**

Opongo esta excepción puesto que los títulos que se pretenden ejecutar no constituyen instrumentos hábiles para reclamar su cobro, ya que los mismos, por tratarse de pagarés de consumo instrumentados en una operación de crédito para consumo, no han sido debidamente integrados como condición impuesta de admisibilidad de la pretensión ejecutiva.

De tal suerte, los pagarés han sido firmados en blanco en una operación de crédito de mutuo para el consumo realizada con la actora, en el que se suscribió los mismos por el préstamo, para la adquisición posterior de bienes o servicios, y la operación financiera no ha sido integrada por el ejecutante, evidenciándose en el caso un abuso del derecho, y las condiciones pactadas no han sido respetadas por el accionante.

Los pagarés en ejecución han sido librados en fraude a la ley del consumidor y transgrede la buena fe que debe primar en las relaciones de consumo conforme arts. 9, 10, 11, 12, 958, 961, 1004 y 1061 del CCCN.

Esto surge, a simple vista de cada uno de los documentos e incluso de la documental testimonial acompañada en autos (aún cuando se trate de introducir una declaración de testigos efectuada recién el 5/6/24 con fecha cierta un día anterior? Por certificación de firma realizada el 4/6/24).

De los propios documentos o pagarés acompañados surge que existe un contrato de mutuo para consumo, en tanto del propio cuerpo de cada uno de ellos se colocó la leyenda o aclaración “.....**por igual valor recibido a entera satisfacción...**”, lo que es demostrativo que el dinero instrumentado en los pagarés devienen de un contrato de mutuo o préstamo para el consumo.

De igual modo, de las declaraciones testimoniales acompañadas en autos por el propio ejecutante, los Sres. Sergio Julio David Galván y Cynthia Giselle Taberna Trujillo, manifiestan en la respuesta a la pregunta nº 5) (Diga el testigo cómo sabe y le consta que las personas indicadas en los puntos 3 y 3 precedentes fueron suscriptoras de los pagarés referenciados), responden que “**nos consta porque estuvimos en las negociaciones efectuadas por el Sr. Roque Tello y las personas indicadas,....**”.

De todo ello surge la existencia de un contrato de mutuo o préstamo de consumo que debía presentarse en este juicio, para su ejecución, con los recaudos de la Ley 24240, puesto que nos encontramos ante un préstamo para consumo por dinero que habría sido entregado por igual valor recibido a entera satisfacción. Siendo el dinero una cosa CONSUMIBLE y FUNGIBLE, lo que nos dá la pauta que esos montos se entregaron para consumo final de bienes y servicios.

Se debe hacer notar, también, que el ejecutante intenta ocultar el préstamo para consumo que le da a los pagarés el carácter de pagarés de consumo, trayendo al juicio declaraciones testimoniales con certificación de firmas antedatadas al momento en que las mismas se habría realizado (4/06/24 y 5/06/24 respectivamente). Y esto se hace en un intento de ocultar el carácter consumeril de los pagarés.

Cualquier interpretación que se dé a esa circunstancia o al contenido de las declaraciones, las mismas deberán interpretarse en el sentido más favorable a mi parte, como consumidor ejecutado en autos.

Debo hacer notar, también, en este punto que uno de los testigos que declaran en el documento traído a juicio por el ejecutante, el testigo SERGIO JULIO DAVID GALVAN, es al mismo tiempo una de las personas respecto a la que el ejecutante solicita autorización en el punto 7 de la demanda, para que efectuar gestiones procesales.

Todo lo cual denota o genera el indicio de toda una estructura organizada por el ejecutante para prestar servicios financieros de operaciones de préstamo para consumo, por las que se ejecutan luego pagarés que se hace suscribir a los consumidores.

Siendo que dicha persona no se trata si quiera, de un profesional procurador o abogado sino de un empleado o persona que integra la estructura de quien ejerce realizando préstamos de consumo.

Tiene dicho la jurisprudencia del fuero que ***"En el texto mismo del pagaré ejecutado se refiere que su emisión se hace "...por igual valor recibido en efectivo y consumos en dicha moneda..." siendo evidente entonces que el pagaré refleja contratos de mutuo dinerario y "consumos" celebrados entre las partes y también es evidente que ha sido emitido como garantía del cumplimiento de aquellos. En el concreto y específico marco referenciado en este particular caso, cabe señalar que el agravio expuesto no logra desvirtuar la consideración sentencial acerca de que "... se trata de una acción de cobro ejecutivo, en base a un pagaré preimpreso, entablada por la empresa Valle Fértil S.A., que tiene como actividad comercial otorgamiento de créditos y préstamos de dinero; contra una persona humana. Las calidades que exhiben las partes, habilitan subsumir a la actora y al demandado en los conceptos de proveedor y consumidor respectivamente, definidos por los arts. 1 y 2 de la LDC, a cuyos textos me remito, en mérito a la brevedad. Por lo que, es acertado presumir -presunción hominis o judicial- que el instrumento en ejecución fue generado en una relación de consumo..."*** ***"...De esta forma, es claro que el pagaré acompañado resulta un título insuficiente por sí para sostener la ejecución pretendida, pues la actora no acompañó el contrato de mutuo ni la documentación respaldatoria del "consumo" que motivaran el libramiento del título cuya ejecución persigue, documentación de la cual deberían surgir los recaudos exigidos por el art. 36 de la ley 24.240 (que deben cumplirse bajo pena de nulidad del contrato)... Atento que la firma actora en el marco de su estructura organizativa (Sociedad Anónima) posee facilidad para la presentación de los medios probatorios relativos al negocio celebrado y no lo ha hecho ni al deducir la demanda ni al responder la medida para mejor proveer dictada por la sra. Jueza de Primera Instancia ni tampoco al expresar los agravios sustentatorios de este recurso, ... En efecto, habiendo advertido la a-quo previo a dictar sentencia de trances indicios de una relación de consumo subyacente al título que se ejecuta y requerido el actor a aclarar el tema, al no haberlo hecho; solo quedaba el rechazo de la vía ejecutiva debido a la insuficiencia del título".-*** **(CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1; VALLE FERTIL S.A. Vs. ALE MANUEL ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO Nro. Expte: 4396/18; Nro. Sent: 6 Fecha Sentencia: 11/02/2021).**

Si bien el actor no se trata de una persona jurídica o una financiera registrada, no es menos cierto que el actor posee varias demandas de este tipo en las que reclama el pago de sumas dinerarias ejecutando pagarés; a la vez de que la protección otorgada por la Ley 24240 no solo lo es con respecto a proveedores de crédito regulados (como bancos o financieras) sino también respecto a proveedores desregulados (entidades no inscriptas o prestamistas individuales).

Inclusive el actor posee inscripción en AFIP en servicios de préstamos financieros.

Es decir, nos encontramos ante sujeto o individuo que otorgó un préstamo para consumo que no instrumentó ni acompañó para integrar los títulos que pretende ejecutar, eludiendo su obligación de hacerlo, de conformidad con establecido por la Ley de Defensa del Consumidor, la cual en el Capítulo VIII, en su

art. 36 detalla expresamente el contenido que debe consignarse en las operaciones financieras para consumo bajo pena de nulidad.

Ese deber de información en favor del consumidor está especialmente protegido por el art. 42 de la CN, el Código Civil y Comercial y la Ley 24240, y al no haberse cumplido inhabilitan a los títulos para su ejecución en este proceso, al no haberse instrumentado en autos el mutuo, ni integrado los títulos que se pretenden ejecutar, con los recaudos establecidos en el art. 36 de la citada ley de protección de los consumidores. Esta omisión impide el acabado control de las cláusulas de otorgamiento del préstamo y el control de los cálculos efectuados para intentar un hipotético cobro de \$923.846, más acrecidas; como así también realizar un control de las tasas de intereses que se pretendieron aplicar.

Al obrar de esta manera, el actor como proveedor de crédito para el consumo, obtuvo para sí una abusiva mejora en su posición contractual, obviando contrapartidas y los derechos de esta parte, tomadora del crédito para consumo, abusando de su condición predominante en un contrato de adhesión.

El actor posee numerosas causas en las que se comporta como proveedor o prestamista de dinero para consumo de bienes o servicios, ejecutando pagarés sin protestos, como en el caso de autos y esa actividad de manera la ejerce de manera habitual. Basta con analizar la cantidad de procesos ejecutivos que inicia en los tribunales del fuero para tener indicios de la relación de consumo causal subyacente.

A ello se suma que de la inscripción en AFIP del actor, surge su inscripción como prestador de SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. El domicilio fiscal en donde ejerce estas actividades es el mismo que el denunciado en la demanda.

Siendo todo ello demostrativo del carácter de los títulos que se pretenden ejecutar como pagarés de consumo.

Y al iniciar este proceso, pretende tratar de soslayar su condición de financiera prestamista en contratos de mutuos con una doble titulación o una simulada titulación a través de pagarés, haciendo referencia a que ejecuta títulos cuya habilidad pretende probar por meras declaraciones testimoniales que, al fin y al cabo, no hacen otra cosa que sumar interpretación en el sentido protectorio y más favorable al consumidor.

Por tratarse de pagarés de consumo, debería haber sido el ejecutante quien demostrara que no nos encontramos ante una relación de consumo y explicar aquellas inconsistencias con las que trataron de disfrazar la posesión de los pagarés.

La doble documentación o la titulación simulada de un préstamo a través de pagarés 'mejora' la situación del acreedor, parte fuerte de la relación, y 'restringe' el derecho de defensa del consumidor al verse obligado a concurrir al proceso ejecutivo con excepciones tasadas y escaso margen de acción, en clara violación a los arts. 36, 37 y 38 de la Ley 24240; teniendo en cuenta las dificultades

para demostrar en un juicio ejecutivo la existencia de incumplimientos en las contrataciones subyacentes.

Además, esta práctica responde a una estrategia que pretende eliminar el control del deudor a la hora de liquidar la deuda, de suerte que la entidad financiera o el prestamista pueda completar el pagaré con la cantidad que juzgue pertinente, sin necesidad de rendir cuentas y así romper el equilibrio del contrato e invertir la carga de la prueba en perjuicio del prestatario.

Con la doble titulación de la deuda o simulada la misma en pagarés de consumo, se incurre en prácticas abusivas, prohibidas en el art. 8 bis de la LDC y por el art. 1096 del CCCN, por abuso del derecho y de la posición dominante (arts. 10 y 11 CCCN), fraude a la ley (art. 12 CCCN), todo lo cual no puede ser convalidado por el Poder Judicial.

Existe una conducta temeraria y abusiva de parte del ejecutante, que en la especie se configura en la indebida búsqueda deliberada de la aplicación exclusiva y literal del principio de abstracción cambiaria para eludir la discusión causal, que en la actualidad y por el dialogo de fuentes habilitan nuestra Constitución Nacional, el Cod. Civil y Comercial, la Ley cambiaria y la de consumo para este tipo de casos.

Todo ello conforme la normativa aplicable, y actuales doctrina y jurisprudencia mayoritaria sobre el tema; siendo que el art. 36 de la LDC consagra un deber de información 'agravado' que establece presunciones que invierten la carga de la prueba u obligan al ejecutante a un deber de colaboración en el proceso. Se habilita, por tanto, en los procesos ejecutivos de esta índole indagar la causa subyacente del crédito, a fin de definir la existencia de una relación que fundamente la aplicación del plexo consumeril y esa actividad no es meramente facultativa del juez, sino que en realidad es débito y materia a indagar.

Dicho examen causal, no solo no se encuentra vedado sino que es obligatorio para el juez, que debe proceder a hacerlo incluso de oficio en razón de tratarse de asegurar la vigencia de normas de orden público (art. 65 LDC). Consecuente con ello, la prohibición establecida en el art. 517, inc. 4) del CPCCT, en cuanto al examen de la causa de la obligación, no rige a los fines de examinar las condiciones que se aplicaron al concederse un crédito al consumidor en los términos del art. 36 de la LDC y art. 1100 del CCyCN.

Así lo han establecido la jurisprudencia en la materia y **la doctrina legal** sentada por nuestra **CSJT en los autos "Banco Hipotecario S.A. c/ Ruíz Paz María Estela s/cobro ejecutivo" en sentencia N° 292 de fecha 19/04/2021**, sosteniendo que: *"El pagaré de consumo ..., conformando un título complejo que permita constatar el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor para las operaciones de financiación o crédito al consumo....."* (...) 4. La calidad de las partes en el juicio ejecutivo constituye un indicio que permite inferir la existencia de una relación de consumo subyacente".

Y en el fuero las doctrinas sentadas por la Excma. Cámara, sala 2, en autos "RODRIGUEZ SOLORZANO ANA MARIA c/ IBARRA MARIA CRISTINA s/ COBRO EJECUTIVO", Sentencia 240 de fecha 13/10/21.

Así como en los fallos “Banco Hipotecario S.A. c/ Pérez Juan Pablo s/ Cobro Ejecutivo”, Expte N° 4200/13, Sentencia N° 175 del 30/06/2017; “Cobranzas Del Interior S.R.L. C/ Campero Miguel Armando s/ Cobro Ejecutivo”, Expte N° 3487/16, Sentencia N° 06 del 14/02/2018; “Banco Del Tucumán S.A c/ Cruz María Ángela s/ Cobro Ejecutivo”, Expte N° 11376/13, Sentencia N° 201 del 30/08/2018; “Dip Susana Alejandra c/ Sbrocco José Ignacio s/ Cobro Ejecutivo”, Expte N° 1087/16, Sentencia N° 36 del 27/02/2019, “Sanatorio Rivadavia S.A. c/ Chavarría Carla s/ Cobro Ejecutivo”, Expte. N° 850/17, Sentencia N° 342 del 22/11/2019; “Garbarino S.A.I.C. E I. c/ Iglesias Juan Diego s/ Cobro Ejecutivo”, Expte. N° 3596/04, Sentencia N° 367 del 19/12/2019; “Comercial Del Norte c/ Ávila Carlos René s/ Cobro Ejecutivo.”, Expte. N° 9965/19, sentencia N° 06 del 02/02/2021; “Marathon S.R.L. c/ Arias Graciela del Carmen s/ Cobro Ejecutivo”, Expte. N° 2943/19, Sentencia N° 22 del 12/02/2021; y “Preferencial S.A. c/ Navarro José Augusto s/ Cobro Ejecutivo”, Expte. N° 5107/19, Sentencia N° 155 del 07/07/2021; “Banco Hipotecario S.A. c/ Ruíz Paz María Estela s/cobro ejecutivo”, Sent. N° 178 del 18/08/2021, “Crediar S.A. c/ Rocha Daniel Alejandro s/ Cobro Ejecutivo”, Expte. N° 2821/18, Sentencia N° 184 del 23/08/2021, entre otros.

En consecuencia, y de acuerdo a la prueba a ofrecerse seguidamente, se haga lugar a esta defensa y se declare la inhabilidad de los títulos ejecutados. Siendo inhábil los mismos deberá el ejecutante iniciar el juicio ordinario de cobro si se cree con algún derecho.

Así se lo declare.

II) OFRECE PRUEBAS.-

Ofrezco como pruebas de la excepción planteada:

A) DOCUMENTAL - INSTRUMENTAL:

1) Las constancias de autos señaladas, es especial la declaración jurada de inicio del proceso, demanda y los pagarés que se ejecutan;

2) DOCUMENTAL: adjunto la siguiente prueba documental:

- Constancia de inscripción del actor en el AFIP.
- Constancia de causas judiciales de ejecución de pagarés iniciadas por el actor, extraídas del SAE.

B) INFORMATIVA: para que se libren los siguientes oficios:

1) A LA AFIP DGI: 1) para que informe si se encuentra inscripta y tiene autorización para funcionar en servicios financieros de préstamos el actor, SR. ROQUE JOSE AGUSTIN TELLO, CUIT N° 20-27141199-6, con domicilio en calle Junín n° 50, 2º piso, Oficina ‘C’ - San Miguel de Tucumán; 2) Para que remita constancia de inscripción de impuestos por servicios financieros.

2) A MESA DE ENTRADAS CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES del Poder Judicial de Tucumán, Capital, a fin de que informe y remita listado de los juicios ejecutivos y/o de ejecución que tuviere iniciados como parte actora el Sr. ROQUE JOSE AGUSTIN TELLO, DNI 27141199; CUIT N° 20-27141199-6.

Se libren los oficios LIBRE DE DERECHOS, atento a que la cuestión debatida se relaciona con derechos del consumidor amparados por las garantías constitucionales y legales de la gratuidad en el ejercicio de los mismos.

C) PRUEBA DE EXHIBICIÓN: Para que sea intimado el actor a exhibir judicialmente y bajo apercibimiento de ley, la documentación obrante en su poder que hubiere suscripto esta parte como parte del contrato de mutuo de consumo, solicitud de adhesión, pedido de préstamo, etc., representativos del préstamo de consumo del cual derivarían como garantía de los mismos los pagarés que se ejecutan.

Provea V.S. la admisión y oportuna producción las pruebas ofrecidas, aceptándose las mismas y oficiándose conforme se solicita con transcripción exacta de lo solicitado como informes, **LIBRE DE DERECHOS** por aplicación de la Ley 24.240, OTORGANDO UN PLAZO PERENTORIO PARA LA CONTESTACIÓN DE LOS OFICIOS BAJO APERCIBIMIENTO DE ASTREINTES, y haciéndose constar en los oficios la fecha de vencimiento del término de prueba.

Se admitan las demás pruebas.-

III) PETITORIO.-

Por lo expuesto a V.S. solicito:

1) Tenerme por presentado, por cumplidos los recaudos legales y constituido domicilio procesal. Me de intervención de ley.

2) Por opuesta las excepción de inhabilidad de título. Por negada la existencia de la deuda. Se dé trámite de ley. Se de trámite a la misma.

3) Por ofrecidas las pruebas, se acepten las mismas oportunamente y ordene su producción.

4) En definitiva y a cualquier trance que se pretenda se rechace la ejecución instaurada en mi contra con expresa condena en costas al ejecutante.

PROVEER DE CONFORMIDAD Y SERA JUSTICIA.-


RICARDO H. ROSA
 DNI 16685972

Dr. LEANDRO G. SAAVEDRA
 ABOGADO
 Mat. Prof. CAT 5870 - L°L. - F° 365
 Mat. Prof. CAS 1945 - L.01 - F° 53
 (Escrito con firma digital)